707-1

# ¿QUIEN ENTERRO EL IN

**Desde la declaración del Ejército, se intentó sepultar la cuenta de la Comisión de Verdad y Reconciliación. Dos meses después, surgen varias iniciativas para reponer la difusión de las violaciones a los Derechos Humanos.**

La imagen del Presidente Aylwin en las pantallas de la Televisión hablando de manera tranquila y pausada, pero con dejos de emoción, difícilmente podrá ser olvidada por quienes estaban esa noche frente a los receptores. La tibia noche del 4 de marzo marcó un hito, fue distinta, impactante. Para algunos fue motivo de evocaciones dolorosas, para otros de vergüenza. Los menos sintieron indiferencia. Pero, no cabe duda que fue la noche en que **la verdad**, oculta, tergiversada, negada durante muchos años se presentó ante todos los chilenos de manera tan contundente que se hacía imposible hacerle el quite. A más de dos meses de ese día, algunos han declarado muerto el Informe de la Comisión de' Verdad y Reconciliación y otros se niegan a darle sepultura, empeñados en mantener viva la verdad más dolorosa del Chile del siglo XX.

Es que el 4 de marzo se reconoció por primera vez, pública y oficialmente, que durante muchos años (los del régimen militar) se torturó, asesinó e hizo desaparecer a cientos de compatriotas con la venia de quienes detentaban el poder y el silencio cómplice de quienes los apoyaban. Y durante algunos días pareció que algo había cambiado en Chile, porque en los carros del metro y en los bancos de las plazas se podía observar a la gente leyendo el contenido del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación. Se calcula en 200 mil los suplementos de diarios como La Nación y La Epoca que se agotaron rápidamente en esos días. Difícilmente en algún lugar donde hubiera más de dos personas no se aludía al tema del momento: todo lo que organismos de derechos humanos habían denunciado era verdad, una espantosa verdad.

La mayoría, incluyendo a los partidos de derecha que formaron la base política del régimen anterior, hicieron «mea-culpa» por los horrores cometidos y aquellos que no deseaban reconocer públicamente su participación -por acción u omisión- en los luctuosos acontecimientos, optaron por un significativo silencio. «Los hechos que hemos conocido son dolorosos y difíciles, pero es legítimo que los distintos partidos políticos tengan diferentes interpretaciones respecto al por qué pasó lo ocurrido», señalaba el dirigente de la UDI Joaquín Lavín, al día siguiente de la intervención de Aylwin en televisión. Renovación Nacional, por su parte, destacaba el hecho de que la Comisión reconociera el clima de violencia que se vivía previamente al 11 de septiembre de 1973, aunque manifestaba su repudio a los sucesos relatados en el Informe. «Rechazamos las argumentaciones de cualquier naturaleza que se den para justificar las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el régimen anterior», anunciaba categórico el presidente del Partido Demócrata Cristiano, Andrés Zaldívar.

Más allá de los matices respecto a las causas, contexto y circunstancias, nadie osó discutir en ese momento que los casos relatados en el documento eran absolutamente ciertos. Aunque para los sobrevivientes de los centros de tortura y algunos familiares de las víctimas, si bien se había reconocido que hubo una política de Estado destinada al aniquilamiento de los opositores, el documento estaba incompleto. No sólo no incluía a todos los muertos y desaparecidos, sino que apenas mencionaba a los miles de chilenos torturados que no murieron en manos de sus verdugos pero que, igualmente, quedaron afectados de por vida. Además, hacía expresa omisión de los nombres de los violadores.

Sin embargo, aunque no fuera todo lo explícito y acabado que algunos hubieran deseado, el remezón a la conciencia nacional era demasiado profundo y los efectos y costos del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación -más conocido como Informe Rettig- parecían insalvables para el sector político que había apoyado o silenciado los acontecimientos, así como para los uniformados implicados. Una encuesta realizada por el Instituto para el Nuevo Chile, por esos días, determinó que un 58.7 por ciento de los chilenos consideraban el Informe Rettig imparcial y objetivo y el 71.3 por ciento opinaba que para hacer verdadera justicia debía sancionarse a los culpables.

Pero... no todo estaba dicho y poco a poco, como si se tratara de una extraña confabulación, otros hechos de violencia fueron sepultando la verdad del Informe a fuerza de atentados criminales, grandes titulares de prensa que destacaban asaltos, declaraciones de dirigentes políticos que hablaban del terrorismo y emplazamientos a los partidos de izquierda para definirse frente al uso de la violencia. En medio de la vorágine, que llegó a su punto cúlmine con el asesinato del senador de la UDI Jaime Guzmán, quedó enterrado el Informe Rettig con sus 2 mil 279 casos de chilenos asesinados o desaparecidos.

No es muy difícil entender por qué a ciertos sectores de la vida nacional la aplastante verdad del Informe Rettig les resultaba, y les resulta hasta hoy, muy incómoda. Durante los 17 años de régimen militar en que se cometieron los atentados a la vida y la dignidad humana hubo muchos que hicieron declaraciones tajantes negando esos hechos, aseguraron en todos los tonos que era una campaña del marxismo internacional y descalificaron a las personas y organismos que denunciaban esos crímenes. «Yo soy de la opinión que este asunto se acabó y se cortó. Y que a todos los que andan ganando plata invocando los derechos humanos se les acabó la pensión», decía en junio de 1989 el general Pinochet.



Por su parte, en junio de 1978, el entonces presidente de la Corte Suprema Israel Bórquez espetaba: «Los desaparecidos me tienen curco». Ese mismo año, el 16 de junio en el diario El Cronista, el entonces ministro del Interior y actual senador designado, Sergio Fernández, se refería a los desaparecidos diciendo: «El Gobierno rechaza, en forma tajante, que ellos podrían estar detenidos ocultamente por las autoridades». La generalidad de la prensa adicta al gobierno de Pinochet no sólo participó en el encubrimiento de los macabros hechos, sino que en la mayoría de los casos se prestó para acusar a las víctimas de todo tipo de tropelías. Por lo tanto, resultaba evidente que la posible aparición de una

# ORME RETTIG?

verdad ocultada por tantos y con tanto esmero no era vista con buenos ojos.

Desde el momento que el Presidente Aylwin anunció en abril del año pasado que formaría la Comisión Verdad y Reconciliación, surgieron voces descalificadoras de la misión que enfrentaría un grupo de personalidades pertenecientes a distintos sectores de la vida nacional. Como «camino equivocado» para lograr la reconciliación la consideraron la UDI y Renovación Nacional. Incluso, el senador Sergio Onofre Jarpa cuestionó a algunos de sus integrantes por «tener juicios formados» respecto al tema de los derechos humanos.

La crítica principal era, sin embargo, que no se debía abocar al estudio de los sucesos acaecidos entre el 11 de septiembre de 1973 y el 11 de marzo de 1990, sino a los hechos anteriores que explicarían lo ocurrido durante el Gobierno Militar. «Nosotros somos partidarios de que se investigue toda la verdad sobre los derechos humanos y no una parte de ella y que el Gobierno se dedique a resolver los problemas que afectan al pueblo y no a hacer política de enfrentamiento en Chile», decía Jarpa en abril del 90.

No sólo la UDI y Renovación Nacional lanzaron críticas a la Comisión. El senador designado Ronald Mac Intyre (almirante en retiro) anticipaba en esos días con tono profético: «hay que tener mucho cuidado cuando se abren determinadas puertas en búsqueda de la verdad», agregando que «hay muchas gente que se aprovecha de estas circunstancias, por razones que podrían ser políticas». Por si acaso, quizás previendo lo impactante que podía ser la verdad, se refirió al perdón señalando que si bien era difícil «una vez que se perdona no interesa meterse en los detalles. Se trata de ver las partes buenas de las personas a las que se está tratando de perdonar». Más categórico fue el general (R) Alejandro Medina Lois que, en entrevista concedida a La Segunda en mayo del año pasado, dijo, refiriéndose a la Comisión: «la forma cómo ha sido planteada la conformación de ella, el período que va a cubrir en sus actividades y las funciones que se le asignan, la hacen profundamente negativa en sus efectos». Y agregaba en otra parte que «aunque aparentemente no es esa la intención, no cabe ninguna duda de que se está tratando de plantear un juicio moral y político a aquel gobierno durante el cual las Fuerzas Armadas y de Orden ejercieron sus atribuciones».



## EL NO DE LAS FFAA

Pero poco a poco las críticas se morigeraron y la Comisión empezó silenciosamente su labor. La seriedad y la reserva con que trabajaron sus integrantes hizo que hasta los más ácidos críticos de la Derecha reconocieran que el trabajo que efectuaban era confiable, y a principios de junio ya había más de 400 peticiones de audiencia para testimoniar. El 14 de mayo, en el diario Las Ultimas Noticias, aparecía una información que cobraría importancia sólo meses más tarde: se decía que uno de los seis médicos amenazados de muerte por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez -quien había aparecido implicado en casos de tortura y había sido sancionado por el Colegio Médico- había aceptado que se entregara el contenido de sus declaraciones a la Comisión Verdad y Reconciliación.

Testimonios, documentos, viajes a lo largo del país, información de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y Carabineros, de las organizaciones de derechos humanos, de familiares de las víctimas de la represión oficial y del terrorismo, hasta completar lo que sería el documento entregado oficialmente al Presidente Aylwin en febrero de este año. El mismo que Aylwin leyó conmovido ante millones de chilenos, horas después que el médico Hernán Pérez Castro -ese que aceptó que su testimonio fuera entregado a la Comisión Rettig- cayera asesinado junto a su esposa en las puertas de su domicilio en la ciudad de Rancagua.

Ya a partir de este repudiable crimen se advirtió la propensión a cubrir los contenidos del Informe Rettig con un manto de hechos violentos. No pasaron muchos días cuando fue asesinado el Prefecto de Investigaciones de Concepción y una serie de asaltos a bancos y locales comerciales desviaron la preocupación de los chilenos. Las declaraciones de la oposición se centraban principalmente en destacar los hechos de violencia y los cuestionamientos al Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación fueron subiendo de tono, aunque sólo el ex director de la DINA, Manuel Contreras, se atrevió a decir a través de las pantallas de Canal 13 que lo que describía el documento era falso.

Pero, fueron los sectores uniformados los que rompieron defitivamente la timidez de la oposición para descalificar el Informe. Primero fueron generales y almirantes en retiro de las distintas instituciones armadas los que entregaron su opinión discrepante. Después se agregó, como un anticipo de lo que opinaría el Ejército, la opinión del coronel (R) Cristián Labbé, quien además de criticar que no se analizaran hechos previos al 11 de septiembre del 73, expresó que «en todo conflicto hay muertes. En Chile fue el saldo de una guerra →

interna que impidió se desatara una guerra civil».

La declaración ponderada y poco agresiva que dio a conocer el comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matthei, ilusionó a algunos. Incluso el primer pronunciamiento de Carabineros (que según el General Director Rodolfo Stange no fue más que una puntualización) hacía pensar que había buena disposición en los sectores uniformados y que la verdad del informe les había impactado. Pero el balde de agua fría cayó cuando la Armada y el Ejército entregaron su opinión. La armada señaló que el documento desfiguraba «la real intervención y motivación que tuvieron las FF.AA. y de Orden en el pronunciamiento militar del 11 de septiembre de 1973, así como también las sitúa como instituciones que desconocen el significado y valor de los derechos de los individuos, calificaciones que resultan injustas y que no pueden ser aceptadas».

El broche de oro lo puso el general Pinochet, quien en una intervención de más de una hora, leída ante el Cuerpo de Generales, comandantes de unidades y más de mil efectivos, rechazó los contenidos del Informe de la Comisión Verdad y Reconciliación diciendo que el Ejército no aceptaba «ser situado ante la ciudadanía en el banquillos de los acusados por haber salvado la libertad y la soberanía de la Patria a requerimiento insistente de la civilidad»; y culminó aseverando que su institución «no ve razón alguna para pedir perdón por haber tomado parte en esa patriótica labor».

No se trató de una opinión más. A partir de allí, quieran reconocerlo o no distintos sectores de la política nacional, el Informe Rettig empezó lentamente a guardarse en el cajón de los temas conflictivos, de esos que es mejor no tocar.

## ASESINATO DE GUZMAN

El primero de abril un grupo de individuos asesinó a Jaime Guzmán, senador de la UDI, líder histórico de la Derecha, sostén ideológico de la dictadura de Pinochet. Personaje controvertido pero fundamental para entender la vida política del país en los últimos veinte años. Su muerte fue la culminación de un clima que venía apuntando, cada vez con mayor intensidad, hacia el problema del terrorismo y la seguridad ciudadana como el eje que sí era capaz de suscitar un amplio consenso en el espectro político.

Guzmán fue enterrado con todos los honores, como el primer gran «mártir de la democracia». Hubo gestos y sentencias que bien reflejan el fenómeno. En televisión y en directo, el diputado socialista Carlos Montes solidarizó emotivamente con el secretario general de la UDI, Joaquín Lavín, diciendo «entendemos el dolor que los embarga, porque nosotros pasamos por lo mismo». El diario «El Mercurio», por su parte, patentó la siguiente afirmación: «Jorge Arrate nunca más podrá decir, 'los muertos son nuestros'», aludiendo a una expresión del dirigente socialista dos días después de conocido el Informe Rettig.

El jurista Jaime Castillo, en un documento denominado «Proposiciones para una política sobre la violencia», escribió a propósito del crimen: «Desde luego, las revelaciones del Informe de la Comisión Verdad han quedado desplazadas. En su lugar, se ha levantado una abierta defensa de los criterios que primaron en el período anterior y casi se ha querido concluir que la lucha por la democracia fue un gran error. Tal ambiente viene a ser la continuación de las exposiciones hechas por las Fuerzas Armadas acerca del Informe de la Comisión Verdad y la reposición de la ideología de la seguridad nacional autoritaria. Se trata de un homicidio que sirve a cualquiera de las dos lógicas de guerra que se han descrito» (se



JAIME CASTILLO VELASCO

# "A LOS QUE BAJO CUALQUIER PRETEXTO CREEN QUE TIENEN DERECHO A MATAR, HAY QUE SACARLES ESA IDEA"

El presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, que integró también la Comisión Verdad y Reconciliación, reconoce que el contenido del Informe elaborado por esa Comisión ha ido paulatinamente perdiéndose en una maraña de acontecimientos producidos después del 4 de marzo. Entre otras, señala las exposiciones que hicieron los Comandantes en Jefe del Ejército, de la Marina y de Carabineros, «aunque este último fue menos drástico que los otros, pero de todas maneras tiene bastantes puntualizaciones, yo diría polémicas y en cierto modo también agresivas. A eso se suma el asesinato de Jaime Guzmán y otros hechos de ese tipo; y las expresiones de algunos grupos de extrema izquierda. O sea, un asunto tapó a otro».

**-¿O sea que todo el trabajo que significó esa Comisión y las esperanzas cifradas en él se diluyeron en menos de dos meses?**

-»Yo creo que eso es provisorio, que es algo así como una gran estrategia de algunos círculos políticos del país, pero no es la realidad de fondo de la opinión pública. Porque la necesidad de una sanción a los hechos de violencia y de crimen justamente se está viendo en el caso del asesinato de Jaime Guzmán: allí se pide una sanción, se pide el descubrimiento de la verdad y la aplicación de sanciones. O sea que ese concepto básico no se ha perdido, sino que en cierto modo está confirmado.

**-Pero esa verdad y aplicación de sanciones no se pide con igual énfasis para las víctimas del régimen anterior...**

-»El problema es que se hace esta discriminación. Por ejemplo, he escuchado a algunos preguntarse por qué se pone Jaime Guzmán a una calle y a ninguna se le ha puesto Tucapel Jiménez. Esos son argumentos, a mi juicio, reales porque esas diferencias se han producido. Pero precisamente porque se han producido y porque son injustas es que se hace necesaria una cierta campaña de opinión que rehabilite y revalorice el Informe de la Comisión 'Verdad y Reconciliación'. Por eso se ha creado esta entidad bajo el nombre *Para creer en Chile*. Y también está la campaña que estamos haciendo en la Comisión Chilena de Derechos Humanos sobre este documento «Proposiciones para una Política sobre la Violencia». Nosotros no podemos aceptar que lo que anteriormente fueron las violaciones a los derechos humanos, sea escondido, encubierto por los sucesos posteriores. Creemos que el país entero debe reivindicar valores que se afectan en los dos tipos de atentados: los terroristas y los represivos ejercidos por el Estado».

**¿Por qué sería necesarios para el país, si algunos piensan que escarbar en el pasado no ayuda en el actual período?**

-Primero es necesario el total esclarecimiento de los hechos; pero también es importante que se saquen conclusiones morales, políticas y sociales de los sucesos que significaron esas violaciones, que se camine hacia la sanción en el grado que sea necesario y, por último, que se apliquen también todas las reparaciones que el Gobierno determine, cuya proposición también está en el Informe. Porque solamente así estableceremos un clima de reconciliación, que a mi juicio no es otra cosa que la subsistencia de la democracia. Reconciliarse es proceder de acuerdo con un gran cuadro ético, político, de respeto, de soluciones justas y también, de amnistía, de perdón, de indulto, según las circunstancias.»

**-La respuesta que la mayor parte de los sectores uniformados dio al Informe de la Co-**



refiere al extremismo de derecha y de izquierda).

Sería demasiado largo enumerar el cúmulo de declaraciones y diagnósticos que suscitó el lamentable hecho. Baste decir que el inmenso despliegue de los medios de comunicación, la petición de ministro en visita por parte del Gobierno, el envío de diversos proyectos de ley al Congreso y, finalmente, la creación de la Oficina Coordinadora de Seguridad Ciudadana, marcaron una diferencia radical con el pasado frente a situaciones similares.

Ha transcurrido más de un mes desde el asesinato de Guzmán y muchos se preguntan si la muerte de una persona, por más impactante y condenable que sea, debe poner una lápida a las más de dos mil consignadas en el Informe Rettig.

## «VERDAD INCUESTIONABLE»

El Subsecretario General de Gobierno, **Edgardo Riveros**, estima que nada podrá modificar el impacto que produjo la intervención del Presidente Aylwin en televisión al dar a conocer el Informe Rettig. «Por una parte está la tremenda verdad contenida en esos hechos, afirma, y por la otra está la decisión del país de que los hechos allí contenidos no se vuelvan a repetir, porque uno observa que hay como una conciencia colectiva de que eso no debe volver a pasar».

Asimismo, señala que no existe en el Gobierno el ánimo de pasar al olvido el Informe Rettig, ya que además de la difusión masiva del texto en los suplementos de los diarios, se suma ahora un libro que será distribuido entre autoridades e instituciones. «Nosotros, como Gobierno, hemos cumplido con lo que estaba en nuestras manos porque, además de entregar la verdad del Informe, nos hemos ocupado de su difusión -aunque reconoce que siempre es posible hacer más- y hemos enviado el proyecto de ley de reparación para los familiares de las víctimas. Entendemos que a lo mejor el proyecto no satisface a los familiares, pero es perfeccionable».

Pero, las agrupaciones de familiares de víctimas de la represión tienen una visión crítica de lo obrado por el Gobierno y los partidos de la Concertación en esta materia. **Berta Ugarte**, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, responsabiliza en primer lugar a los partidos políticos de la suerte que ha corrido el Informe Rettig. «Por no haber asumido y mantenido la causa de los Derechos Humanos de la misma forma que la usaron en la campaña electoral. Por otro lado están los compromisos de los partidos políticos y del Gobierno, que no quieren dificultades con aquellos sectores que aparecen como culpables en el Informe». En cuanto a la influencia del asesinato de Jaime Guzmán en el fenómeno, afirma que «los que lo asesinaron nos hicieron un pésimo favor. Nosotros no aceptamos el asesinato de nadie porque defendemos la vida».

La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, **Sola Sierra**, expresa que la reacción de la sociedad no ha sido la que ellas esperaban, después de los primeros días de conocido el Informe. Concretamente, querían que «todas las instituciones del país tuvieran gestos que demostraran que nunca más se repetirían estos hechos, que se creara una cultura de los derechos humanos. Eso no se está dando ni en los medios de comunicación, ni en los planes de estudio del Ministerio de Educación, ni en las acciones del propio gobierno». Explica: «la tarea que el mismo Gobierno reconoció que estaba pendiente, como es encontrar a los detenidos desaparecidos, no avanza ni se ven acciones concretas para lograrlo. Porque esa Corporación de Derechos Humanos que se creará tiene más limitaciones que la Comisión Rettig».

Agrega que en la justicia las causas tampoco han avanzado, a pesar de los antecedentes

→

**misión Verdad no apunta a reconocer el contenido del documento como verdadero...**

-La esencia de la argumentación de las FF.AA. consiste en que una situación que afectó a la vida y a la integridad personal de tanta gente, está justificada por circunstancias anteriores, lo que hace desaparecer esos hecho como violación de derechos humanos. Es un concepto dictatorial, es el concepto en que se funda una tiranía y no una democracia, no es democrático ni humanista ese concepto. Y, por lo tanto, consideramos que eso es un error del cual deben ser convencidas las propias FF.AA. por los métodos democráticos, de educación, de información.



**-Pero se dice que el verdadero problema de nuestro país en estos momentos no es lo que ocurrió en el pasado, sino el terrorismo y la delincuencia actual ¿usted no cree esto?**

-Yo diría que es necesario aplicar a todos una reformación ética, política y social. Es necesaria para el delincuente político terrorista, como para el delincuente común. Ese hombre merece una sanción, ha cometido un delito, es aislado de la sociedad, pero no deja de ser una persona, los Estados se preocupan por los delincuentes, o sea hay que salvarles la vida, hay que salvarles su integridad física, hay que tratarlos como personas. Y por lo tanto aquí se aplica la misma regla: a todo aquel que crea que el delito es el camino -y llamo delitos el justificar asesinatos con cualquier pretexto político, con cualquier idea, la religiosa o simplemente la política; puede ser católica o anticatólica, comunista o anticomunista- digo, al que se funde en esas concepciones para creer que tiene derecho a matar hay que sacarle esa idea. Pero para eso uno tiene que actuar de tal manera que vean que se trata a todos en la misma forma.

No puede quedar en el olvido una situación establecida con hechos, como fue las violación de los derechos humanos de muchas personas y, en cambio, destacarse una situación análoga en que los muertos son del otro lado político. No se puede.

**-¿Usted piensa que con esta campaña que se va a iniciar ahora, se podrá hacer ese trabajo de conciencia que debería haberse hecho a nivel de todos los chilenos?**

-Alguna vez se ha dicho que la gente difícilmente se mantiene un tiempo largo en estado de conmoción, tarde o temprano se afloja la tensión porque las personas no son capaces de mantenerse colectivamente en estado de expectación. Ahora todavía se mantiene la tensión por el asesinato del senador Guzmán y hay razones para ello, porque es un crimen demasiado horrible, premeditado, en fin, una serie de consideraciones muy importantes, pero la tensión será superada. Es evidente que no vamos a resucitar con la misma fuerza los momentos inmediatos a la entrega del Informe, pero yo creo que a la larga, con cierta perseverancia en el asunto -y como los problemas no han terminado ni terminarán, por ejemplo la necesidad de una política de reparación a las familias de las víctimas, los desaparecidos continúan desaparecidos- el tema va a seguir siendo tratado. Yo veo que hay interés en muchas partes.

707-5

que la Comisión entregó a los tribunales. «Pero lo más grave es que la actitud de la justicia está siendo avalada por el propio gobierno, porque de hecho se ha dicho que se respeta la ley de amnistía, lo que es una contradicción con lo planteado en el Programa de la Concertación».

Riveros, por su parte, destaca los unánimes acuerdos para apoyar la intervención del Presidente Aylwin tanto en la Cámara como en el Senado, por lo que supone que el Poder Legislativo cumplirá con las modificaciones legales necesarias para la consecución de los objetivos de reparación y justicia. «Pero la administración de justicia le corresponde al Poder Judicial y no podemos como Gobierno intervenir en ella», aclara.

## NO HA MUERTO

«El Informe Rettig no ha muerto, por una razón sustancial: se trata de una verdad incontrovertible, y la verdad no muere», señala enfáticamente el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del PPD, **Domingo Namuncura**. Es más, asume como natural que un hecho tan grave como el asesinato de Guzmán afectara la dinámica del proceso que comenzó a partir del conocimiento público del Informe, pero piensa que ahora se entra en una segunda etapa, «de tomarlo en proyección». Profundizando esa verdad incompleta -lo que implica determinar el paradero de los detenidos desaparecidos- y concretando las propuestas que surgieron del propio Informe, para que se garantice ese «Nunca Más» que el pueblo chileno quiere.

El gran desafío, agrega, «es convertir a los derechos humanos en un aliado estratégico de la democracia», y en ese sentido las responsabilidades recaen en la sociedad en su conjunto (Poderes del Estado, partidos políticos, movimiento de derechos humanos y organizaciones sociales). La justicia y la reparación, indica por otra parte, continúan siendo tareas pendientes.

A pesar de que esas tareas aún no se concretan, el personero estima que el Gobierno cumplió, en la medida de sus posibilidades. «Entendemos que éste, en la perspectiva de dar garantías para la transición y avanzar en su consolidación, tiene que poner límites naturales a ciertos procesos». Entre esos «límites naturales», Namuncura cuenta el veto de la oposición en el Parlamento, la Constitución de 1980 y el poder Judicial. En el PPD, dice, «somos responsables, no vamos a sobrepasar los límites que la transición tiene, pero cuando el Gobierno no puede, los partidos y los movimientos sociales tienen que hacer presente sus responsabilidades a los Poderes del estado».

Respecto de ese rol, su visión es crítica. Y sostiene que tanto a los partidos de la Concertación como a los actores del movimiento de DDHH les ha faltado autocrítica y no han elaborado una estrategia adecuada para la transición, manteniendo una forma «conservadora» de presentar el problema. «Ni la denuncia ni el testimonio son ya suficientes para convocar, ahora se necesitan propuestas. Y que el tema de los derechos humanos no se relacione siempre con muertes y drama, sino que pase a formar parte de la cultura de la vida».

Todo lo anterior, concluye Namuncura, es aprovechado por la Derecha y capitalizado en su favor. Las aprensiones que tuvo el PPD para no firmar el «Compromiso por la Paz» antes de que el país conociera el Informe Retigg, afirma, se vieron confirmadas con posterioridad y por lo tanto esa decisión se transformó en definitiva. «Mientras la Derecha no demuestre una voluntad real de reconciliación va a tener que aceptar esas dudas de credibilidad», apunta, agregando que, «más que compromisos de intenciones se requieren testimonios, gestos, y esos no han existido por parte de ellos». Es válido esperar y plantear al país que debido a esa actitud ese sector sea castigado con el voto ciudadano en las próximas elecciones municipales, puntualiza, «porque el juicio político es parte consustancial de la justicia».

## A PESAR DEL INFORME

Radicalmente distinta a la postura del dirigente del PPD es la del integrante de la Comisión Jurídica de la UDI, **Carlos Goñi**, quien afirmó a ANALISIS que si el Informe Rettig sufrió una brusca baja de perfil en la sociedad chilena fue porque a su juicio no respondió a ninguno de los dos grandes objetivos para los cuales fue creado: la verdad y la reconciliación.

«No fue un aporte a la reconciliación, afirma, porque si se observa lo que ocurrió inmediatamente después de conocido, en el país se acentuaron las recriminaciones. En vez de otorgar el perdón, todos le exigían el perdón a terceros». Respecto de la verdad, opina que en el marco histórico que presenta el Informe ella está tergiversada, «y eso obviamente, como el documento es uno solo, hace desmerecer el resto, que es donde están los casos».

En ningún caso el Informe es una verdad incontrovertible, como se ha dicho, plantea Goñi, «puesto que siguen habiendo varias verdades». Añade que la UDI reconoció desde hace mucho tiempo «y no como resultante del Informe, que se cometieron excesos en la lucha contra el terrorismo» y que había necesidad de reparación para los familiares de las víctimas. Luego plantea que su partido apoyará el proyecto de ley sobre reparación en el Congreso no como una consagración de lo que plantea el Informe, «sino a partir del convencimiento de que existe en este país gente que sufrió hechos dolorosos en determinadas circunstancias y que eso merece una reparación, una indemnización. Pero el punto de coincidencia llega hasta ahí».

El asesinato de Jaime Guzmán en cambio, enfatiza Goñi, sí ha creado condiciones de reconciliación en el país en la medida que «estamos viviendo reacciones no inducidas en la opinión pública, como que se olvide del Informe y nazca un fuerte acercamiento en el país». Y también porque aclara una confusión en la opinión pública en el sentido de que «es el mismo sector que destruyó la democracia entre el 70 y el 73 el que actúa ahora». De modo que en su parecer, «queda claro de dónde viene el peligro, y la necesidad de unirse y actuar responsablemente para no revivir historias que al país le hicieron tanto daño». Para Goñi, «el país avanza hacia la reconciliación a pesar del Informe, que fue un elemento distorsionador».

ANALISIS intentó recoger la opinión del dirigente de Renovación Nacional, Andrés Allamand, especialmente por sus expresiones vertidas en El Mercurio respecto a que la muerte de Jaime Guzmán enterró el Informe Rettig. No fue posible conseguir que respondiera a nuestras interrogantes, pero todo hace pensar que en los sectores derechistas existe una sensación de triunfo por el fenómeno producido, esto es, el desdibujamiento del Informe de la Comisión Verdad. El editorial del director de la revista Qué Pasa, del 6 al 12 de mayo, lo explicita. «Las tensiones entre el Gobierno y las FF.AA., y muy especialmente con el Comandante en Jefe del Ejército, quedaron atrás. También el tema de los derechos humanos. No sólo porque las autoridades han dado vuelta la hoja, sino porque la opinión pública ha sustituido estos hechos del pasado -por más dolorosos que sean- por las preocupaciones del presente. La delincuencia y el terrorismo de hoy han podido más. La fuerza de los hechos ha impuesto su realidad. El conocimiento de la verdad y sus consecuencias, hasta ayer mil veces pensado, temido y deseado, es hoy una realidad olvidada», asegura Roberto Pulido.




## AUTOCRITICA

Para el vicepresidente del Partido Socialista, **Jaime Pérez de Arce**, el debate en torno al Informe Rettig «no está en absoluto agotado, de partida porque éste planteó cuatro grandes objetivos que aún no se han cumplido a cabalidad: la verdad, la justicia, la reparación y la reconciliación». En relación a los dos primeros, señala que se mantienen deficitarios, especialmente el segundo. En cuanto a la reparación, plantea que su partido comparte las críticas de la Agrupación de Familiares de Deteni-

dos Desaparecidos al proyecto de ley elaborado por el Gobierno. Por último, afirma que «la reconciliación es difícil de lograr si no se cumplen los otros tres».

Respecto del por qué el Informe Rettig prácticamente desapareció de la discusión pública, el dirigente reconoce que «en eso ha habido una debilidad muy grande. Efectivamente desde el ámbito de la sociedad civil la capacidad de difusión y debate fue precaria; nos hacemos parte de esa autocrítica, pero no señalamos con el dedo a nadie. Nos pasó a todos».

Pérez de Arce apunta luego a que lo que tiene que emerger de ese debate «es una cultura de civilización de los derechos humanos en las grandes masas, que se traduzca en todos los terrenos, no sólo frente a la muerte o al terrorismo». Agrega que eso implica el respeto a las ideas y el apego a las normas democráticas. «Ese es un desafío para la Derecha, recalca: ¿Están dispuestos a aceptar que el día de mañana asuma la conducción del país un gobierno de izquierda si la mayoría del país así lo decide? La inquietud tiene directa relación con el pasado».

Para el presente, el dirigente señala que el PS estudia diversas propuestas que tiendan a producir avances sustanciales en las tareas pendientes que dejó el Informe Rettig. Como elaborar una ley interpretativa de la ley de Amnistía, o plantear que como Chile suscribió el Pacto Internacional de Derechos Civiles, el cual establece la no prescripción de delitos de lesa humanidad y actúa como precepto constitucional, se aplique por sobre la ley. «Se verá qué forma es más eficiente para los objetivos que se persiguen», acota.

Volviendo a las razones de la pasividad que se advierte hoy en torno al Informe, Pérez de Arce cree que la explicación no es sencilla, pero menciona al menos dos factores. «Hay cierta percepción en la gente y en los actores políticos en particular, que por mucho que se pudiese haber agitado el tema la llave para transformar eso en una herramienta política eficaz no la tienen ellos ni el Gobierno, sino otros actores que aparecen como impermeables frente a la envergadura del drama: los Tribunales, la Derecha y las Fuerzas Armadas. Eso produce dolor y frustración».

En segundo lugar, estima que «a pesar de todo el reclamo de participación por parte de las bases, sigue existiendo en los partidos y en las organizaciones sociales un grado de centralismo espectacular, y una incapacidad de iniciativa y creatividad muy grande». Eso se reproduce en la relación entre partidos y Gobierno, reconoce.

## «PARA CREER EN CHILE»

Pero, la reacción parece haber comenzado. «Para Creer en Chile» es una campaña nacional de educación por la verdad y los derechos humanos, que nace como iniciativa de la sociedad civil, para difundir masivamente los contenidos y propuestas del Informe Rettig. Organizada por la Comisión Chilena de Derechos Humanos y el Centro Ideas (el mismo que preparó a los apoderados para el plebiscito del 89), busca generar «un proceso de pedagogía social y de reflexión colectiva en torno a la Verdad, la Justicia y la Reconciliación». Igualmente, sus organizadores destacan que «es una campaña pluralista y democrática, orientada a que la comunidad nacional consolide en su matriz política y cultural los Derechos Humanos como fundamento de una sociedad democrática».

La campaña es presidida por el abogado Alejandro Hales, en representación de la Federación de Colegios Profesionales. También concurren en ella la Central Unitaria de Trabajadores, CUT, el Colegio de Profesores, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la Vicaría de la Solidaridad, los senadores Carmen Frei y Ricardo Núñez, artistas como Jorge Edwards y José Balmes, la FECH, organismos de derechos humanos como FASIC y CODEPU, y personalidades ligadas a los derechos humanos como el pastor evangélico Juan Sepúlveda.

Pero el «trabajo pesado» se lo llevarán, en realidad, unos tres mil monitores voluntarios que están siendo capacitados para conseguir los objetivos antes señalados. Durante el tiempo preparatorio, los directivos de la campaña se han estado reuniendo con partidos políticos y autoridades de gobierno, incluido el Presidente Aylwin, en busca de «apoyo logístico», como infraestructura de locales y otros.

«No vamos a aceptar que se entierre el Informe Rettig», señaló **Alejandro Hales** a ANALISIS. «Jaime Guzmán no puede ser la persona que con su muerte sepulte las violaciones a los derechos humanos en Chile. Quienes creen que el silencio es el mejor camino cometen un error, porque son los mismos que callaron antes y no impidieron los crímenes. Sólo la denuncia les puso un cierto freno».

Y agrega: «Creemos representar a la sociedad civil, que no está sólo en los partidos y los institutos armados. Vamos a transmitir este evangelio de la verdad para que se forme una gran conciencia nacional, en civiles y militares. Para que el que actuó por órdenes superiores dé a conocer los hechos, porque estoy convencido de que la verdad es un descargo para el criminal. En definitiva, para que nunca más». ●

**JUANITA ROJAS**
**SUSANA KÚNCAR**

C O L U M N A

# Volver al Informe Rettig



**MARIA MALUENDA**

Más allá del estremecimiento que sentimos todos por el asesinato del senador Jaime Guzmán es inevitable preguntarse qué buscaron los autores del criminal y bien calculado operativo. Guzmán era un político derechista que creía en su verdad y que luchaba por ella con las armas de su inteligencia y del juego político del momento. Estaba al otro lado de la barricada en la que nosotros estamos. Y ahora en democracia podíamos enfrentarnos cara a cara con él. La inmensa mayoría del país impuso derechos que al propio Guzmán le parecían inconvenientes porque apuntaban contra un edificio en paulatina demolición que él ayudó a construir.

El crimen se produjo en momentos en que todo el país había conocido o leído lo sustancial del Informe Rettig. Y también luego de la estupefacción que produjo la aparición en televisión del ex general Contreras, como preludio de la declaración del Ejército.

Contreras hizo desaparecer una vez más a los millares de víctimas de un régimen de cuyo terror fue, desde el comienzo, su planificador. Según él aquí no ha pasado nada. La DINA o la CNI fueron servicios ejemplares que ayudaron a una guerra en la que sólo hubo vencidos y de cuyos muertos no se da cuenta. No fue tan diferente la declaración del Ejército al día siguiente. Ni siquiera salió de allí alguna autocrítica o siquiera un reconocimiento de las lacerantes e incurables tragedias causadas en estos últimos años a tantas familias chilenas.

Para algunos debe resultar reconfortante la desaparición de la primera plana de los diarios del Informe Rettig. Lo consideran tema agotado y no lo quieren en la agenda de los debates.

No obstante el país exige verdad y justicia. Y esto no es sólo perentorio para los familiares de las víctimas sino también para la inmensa mayoría ciudadana. Basta para comprobarlo con lo que dice la opinión pública en las encuestas callejeras. Es un tema difícil de apartar o borrar de la memoria. Está allí golpeando la conciencia de los ciudadanos honestos que son los más.

En su reciente gira por Europa el Presidente Aylwin reiteró su voluntad de establecer la verdad y hacer justicia. Es imposible que el Informe Rettig pueda transformarse en un documento extemporáneo o inoportuno. Es un desafío que debe enfrentar y resolver la democracia chilena en esta etapa y no después.

A pesar de todos los esfuerzos y malabares de quienes buscan sepultar sus culpas el Informe Rettig y la verdad recomienzan a ocupar el lugar del cual sólo pueden desaparecer cuando los hechos consignados en el papel se transformen en las acciones con las que debe responder una nación civilizada que ha restablecido los derechos humanos como uno de sus pilares fundamentales.

El Gobierno ha enviado al Congreso el proyecto de reparaciones a las víctimas de los atropellos. Y tanto los parlamentarios como los representantes del Ejecutivo están en disposición de escuchar con respeto y espíritu constructivo la voz de los afectados.

No en vano el pueblo ha soportado mil dificultades para encontrar y afianzar el camino de una auténtica transición a la democracia. No era otra la razón de la lucha de los que cayeron y con los cuales seguimos en deuda.